



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE
BOLLETTINO

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLS
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

Lunedì, 08.06.2026

N. 0486

Pubblicazione:

EMBARGO

FINO AL MOMENTO IN CUI IL TESTO È PRONUNCIATO

VALE SOLO QUANTO PRONUNCIATO, SALVO INDICAZIONI DIVERSE

Sommario:

◇ Viaggio Apostolico di Sua Santità Papa Leone XIV in Spagna (6 - 12 giugno 2026) – Incontro con i membri del Parlamento spagnolo presso il “Palacio de las Cortes”

Incontro con i membri del Parlamento spagnolo presso il Palacio de las Cortes

Discorso del Santo Padre

Traduzione in lingua italiana

Traduzione in lingua tedesca

Alle ore 9.30 di questa mattina, dopo aver celebrato la Santa Messa in privato, il Santo Padre Leone XIV incontra privatamente il Presidente del Governo di Spagna, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Successivamente, alle ore 10.15, il Papa lascia la Nunziatura Apostolica e si trasferisce in auto al *Palacio de las Cortes* per l'incontro con i membri del Parlamento spagnolo.

Al suo arrivo, alle ore 10.30, Papa Leone XIV viene accolto all'ingresso principale dalla Presidente del Congresso dei Deputati, Francina Armengol, dal Presidente del Senato, Pedro Rollán Ojeda, e da altre 6 autorità.

Dopo l'esecuzione degli inni nazionali di Spagna e della Città del Vaticano, i Presidenti del Congresso e del Senato accompagnano il Santo Padre nel *Salón de Pasos Perdidos*.

Quindi dopo la foto ufficiale, il Papa firma il Libro d'Onore e avviene la consegna di una riproduzione del *Libro delle Ore*.

Successivamente, nel *Salón de Plenos*, dopo le parole di benvenuto della Presidente del Congresso dei Deputati, Papa Leone XIV pronuncia il Suo discorso.

Al termine, il Santo Padre si trasferisce in auto nella sede della Conferenza episcopale spagnola.

Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa rivolge ai presenti nel corso dell'incontro:

Discurso del Santo Padre

Presidente del Gobierno,
Presidenta del Congreso de los Diputados,
Presidente del Senado,
Presidente del Tribunal Constitucional,
Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
Miembros del Congreso de los Diputados y del Senado,
Señoras y señores:

Agradezco a la Señora Presidenta sus amables palabras, así como la invitación que la Sede Apostólica ha recibido con ocasión de mi viaje a este país, así como la deferencia de acogerme en este histórico Palacio del Congreso de los Diputados, ámbito eminente de la vida institucional, jurídica y democrática del Reino de España. Vengo ante todos ustedes como Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia católica, consciente de que la misión confiada al Sucesor del apóstol Pedro como principio y fundamento de unidad de los Obispos y de los fieles (cf. *Lumen gentium*, 23) coloca a la Santa Sede, de modo peculiar, en diálogo con los pueblos y con los Estados.

Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España, en el marco de la mutua cooperación, y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana. La Iglesia “camina con la humanidad”, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar “por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy”. Por eso, cuando se dirige a la vida pública, lo hace respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar. Reconoce “la autonomía de las realidades terrenas” y “la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política”; y, precisamente desde esa conciencia, aporta una reflexión nacida del deseo de servir al bien común y de recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia (cf. *Magnifica humanitas*, 18-19).

En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y, cuando es posible, se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva: qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes.

Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica. Su identidad geográfica y política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente. En sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo, permanece viva una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la justicia y ordenar la vida común.

Desde las páginas universales del *Quijote*, donde Cervantes proclamó que «la libertad [...] es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos» (*Don Quijote de la Mancha*, II, 58), hasta la hondura espiritual de santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre «no se resigna a morir del todo» (*Del sentimiento trágico de la vida*, I), España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico o político: lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir; en una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa.

Por eso, al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró. La presencia simbólica en esta sala de los Reyes Isabel y Fernando remite a aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de alcance universal; pocos años después, Salamanca habría de asumir, con singular lucidez, la reflexión moral y jurídica que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria, hace quinientos años, cuando

se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder. Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana.

Sin embargo, aquel interrogante abrió un horizonte intelectual y moral que desbordó su propio momento histórico. La intuición del *totus orbis*, de una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, permitía afirmar la existencia de vínculos jurídicos y morales entre los pueblos. Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca —y de manera particular fray Francisco de Vitoria, junto con otros dominicos y jesuitas— contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy: que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Ésta es una de las grandes herencias de España: haber unido la acción histórica con la lucidez de la razón moral. Aquella contribución, nacida a orillas del Tormes, trascendió las aulas y las bibliotecas, y llegó a formar parte de una conciencia más amplia, compartida por la comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza. Ese legado vive también en estas Cortes, cada vez que el legislador se pregunta cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar.

La pregunta salmantina sigue acompañando la tarea de quienes sirven a la vida pública. Hoy, los nuevos mundos que se abren ante nosotros ya no se dibujan en los mapas: se despliegan en la técnica, en la economía, en la biomedicina y en el universo digital, donde el poder humano alcanza ámbitos cada vez más delicados de la vida personal y social.

El progreso ofrece posibilidades admirables, y hoy lo vemos de modo singular en el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Como he recordado en mi reciente Encíclica, la tecnología en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza (cf. *Magnifica humanitas*, 9); por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones, y cómo se plantean hoy, de manera nueva, la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común.

Este discernimiento comienza por una afirmación primera: toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento (cf. BENEDICTO XVI, *Discurso ante el Parlamento Federal alemán*, 22 septiembre 2011). Pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir, y por eso debe orientar todo ordenamiento jurídico positivo. La fe cristiana la proclama a partir de la Revelación; la razón humana puede reconocerla como exigencia inscrita en la verdad del hombre (cf. *ibíd.*). Cuando esta convicción permanece viva, el derecho se convierte en amparo de todos y en garantía frente a la imposición de intereses y agendas particulares.

Sobre este fundamento, me corresponde pronunciar hoy una palabra serena y firme ante quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social. Esta convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte, como tantas veces advirtió el Papa Francisco (cf. *Discurso a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida*, 27 septiembre 2021). En este sentido, si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni

un interés confesional: es una meta de civilización.=Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona. Por eso, la grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad.

El bien común es, en cierto modo, “la forma social de la dignidad humana” (cf. *Magnifica humanitas*, 59). No consiste en la mera suma de intereses particulares, sino en «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección» (*Gaudium et spes*, 26). Cuando el bien común deja de ser horizonte compartido, la acción pública corre el riesgo de fragmentarse en intereses parciales, incapaces de custodiar aquello que pertenece a todos.

En este contexto, reviste particular importancia la familia, realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad. En el hogar se entrelazan las generaciones y se transmite una memoria viva que da continuidad interior a la sociedad. Allí donde la familia es sostenida, se fortalece también la estabilidad espiritual y social de las naciones. La familia será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer.

También las instituciones educativas ocupan un lugar decisivo en esta tarea. En ellas, las nuevas generaciones pueden aprender a buscar y amar la verdad, a cuestionarse sobre el sentido de la vida y la dignidad de cada persona. Por eso, muchos padres deseosos de que sus hijos aprendan a relacionarse, a pensar con espíritu crítico y a adquirir valores sólidos, depositan en ellas grandes esperanzas, como valiosas aliadas en su educación. Esta colaboración ha de respetar siempre el «derecho primario e inalienable» de los padres a «elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas» (cf. *Magnifica humanitas*, 143; cf. *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, art. 18.4).

La afirmación de la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro. También el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional. Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos.

La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración; y promover, al mismo tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, entre ellas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática (cf. *Magnifica humanitas*, 81).

En los últimos años, las rutas cada vez más peligrosas han evidenciado el altísimo coste de esta realidad, tantas veces escondida o ignorada. Muchas personas siguen siendo presas de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su desesperación. Es necesario fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas, especialmente en el marco de una cooperación regional y multilateral.

Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud. Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran. Cuando la respuesta institucional se hace

cercana, justa y coordinada, las fronteras dejan de ser lugares de abandono y pueden convertirse en espacios de protección responsable de la dignidad humana.

Señorías:

El mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural, que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca. En este contexto, la paz se presenta como una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral. Reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia.

En el plano internacional, la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional. Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia entre las naciones. Las armas pueden imponer un silencio temporal; pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera.

Por eso, preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra. También el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en el ámbito militar exige una vigilancia ética rigurosa, para que las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la persona humana (cf. *Discurso en la Universidad "La Sapienza"*, 14 mayo 2026).

La comunidad internacional está llamada a redescubrir el valor indispensable del diálogo como camino paciente hacia acuerdos justos y duraderos, fundados en el respeto a los tratados, en la transparencia de la acción diplomática y en la voluntad sincera de anteponer la paz al recurso a la fuerza. De ahí nacen la confianza y la esperanza.

Como recuerda el lema de la Unión Europea, *In varietate concordia*, la unidad verdadera no es uniforme, sino que cohesiona en la diversidad, haciendo de las culturas, sensibilidades y tradiciones una ocasión de enriquecimiento mutuo.

Asimismo, dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz, cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.

Pero la paz no es solamente una realidad política o institucional. Nace también en la conciencia, allí donde el rencor, la indiferencia y el odio ceden espacio a la reconciliación. Por eso, se instaure y se proteja también a través del lenguaje. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos; pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen, por eso, una especial obligación de custodiar la palabra para «desarmar el lenguaje» (*Mensaje para la Cuaresma de 2026*, 13 febrero 2026). La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación.

De este respeto al otro nace también el deber de custodiar el espacio donde maduran sus convicciones, su conciencia y su relación con Dios. La atención a ese ámbito interior permite comprender mejor una cuestión decisiva para toda sociedad verdaderamente democrática: la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho fundamental que tutela el ámbito más íntimo de las personas. La libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la tutela jurídicamente; y evita que alguien tenga que renunciar a contribuir a la sociedad en la que vive por causa de su fe.

Sin confundir el plano jurídico con el moral, conviene recordar también que la libertad necesita una comprensión plena de sí misma. Ser libre no significa únicamente estar libre de

coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección; significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida (cf. *Dignitatis humanae*, 1). Desde esta perspectiva, la legítima autonomía del orden temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso. La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones; sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública.

En este contexto, el sigilo sacramental de la confesión reviste una importancia especial para la Iglesia católica. Se inserta en el ámbito más amplio de la libertad religiosa, que garantiza a las comunidades creyentes un espacio propio de vida, organización y disciplina interna (cf. CONFERENCIA SOBRE LA SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA, *Acta Final de Helsinki*, 1 agosto 1975, Principio VII). Tutelarlo jurídicamente, como sucede de modo análogo en algunas profesiones, significa preservar un espacio sagrado de libertad interior, donde el creyente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas, como reconocen también las normas internacionales (cf. CORTE PENAL INTERNACIONAL, *Reglas de Procedimiento y Prueba*, Regla 73.3).

Señoras y Señores:

Permitan que me detenga un instante en algunas imágenes que adornan esta Cámara. En este Salón de Sesiones, la luz natural entra por el lucernario que corona la sala. Esa luz que viene de lo alto puede recordar que también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera.

También las pinturas que evocan, en la parte superior del muro principal, la recepción del Evangelio y del Decálogo recuerdan algo esencial. Sin confundir el orden político con el religioso, esos signos invitan a reconocer que la libertad moderna ha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la tradición cristiana. En esa escuela interior, los pueblos aprendieron que el derecho debe servir al bien, que la justicia pone límites a la fuerza, que el poder necesita legitimidad, que los pobres pertenecen plenamente a la comunidad, que el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad y que la vida humana jamás puede ser tratada como mercancía.

Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse.

Les invito a alzar, pues, la mirada: no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír. Porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública. Por eso, junto a las respuestas técnicas y las reformas legales, hace falta también una renovación moral.

España puede ofrecer mucho en este camino. Cuenta con una lengua que une continentes; una tradición cultural, jurídica y espiritual que ha sabido poner en diálogo fe y razón, derecho y conciencia, unidad y pluralidad. Esta experiencia histórica recuerda también el valor de la concordia y del esfuerzo paciente por construir una convivencia pacífica y justa.

Que esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro. Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio.

Que Dios conceda paz a todas las naciones de la tierra, concordia a las familias y serenidad a las conciencias. Y que, sobre el Reino de España, marcado por la huella apostólica de Santiago y por la presencia maternal de la Virgen del Pilar, desciendan días de prosperidad, justicia y paz duradera. Muchas gracias.

Traduzione in lingua italiana

Presidente del Governo,
Presidente del Congresso dei Deputati,
Presidente del Senato,
Presidente del Tribunale Costituzionale,
Presidente del Tribunale Supremo e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario,
Membri del Congresso dei Deputati e del Senato,
Signore e Signori,

Ringrazio la Signora Presidente per le sue gentili parole, nonché per l'invito che la Sede Apostolica ha ricevuto in occasione del mio viaggio in questo Paese, e per la cortesia con cui mi avete accolto in questo storico Palazzo del Congresso dei Deputati, sede eminente della vita istituzionale, giuridica e democratica del Regno di Spagna. Mi presento davanti a voi come Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa cattolica, consapevole che la missione affidata al Successore dell'apostolo Pietro come principio e fondamento dell'unità dei Vescovi e dei fedeli (cfr *Lumen gentium*, 23) pone la Santa Sede, in modo particolare, in dialogo con i popoli e con gli Stati.

La mia presenza tra voi vuol essere un gesto di vicinanza verso la Spagna, nel quadro della cooperazione reciproca, e una parola offerta al servizio della persona umana. La Chiesa «cammina con l'umanità», ne condivide le speranze e le ferite, ascolta le domande di ogni epoca e si lascia interpellare «da tutto ciò che riguarda l'esistenza degli uomini e delle donne di oggi». Per questo, quando si rivolge alla vita pubblica, lo fa nel rispetto della missione propria delle istituzioni e della legittima responsabilità di coloro che hanno ricevuto il mandato di legiferare. Riconosce «l'autonomia delle realtà terrene» e «la distinzione tra comunità ecclesiale e comunità politica»; e, proprio a partire da questa consapevolezza, offre una riflessione che nasce dal desiderio di servire il bene comune e di ricordare ciò che rende veramente umana la convivenza (cfr *Magnifica humanitas*, 18-19).

In questo Emiciclo si dà forma giuridica alla convivenza sociale. Qui le differenze vengono ascoltate, ordinate e, quando è possibile, si trasformano in decisione condivisa. Per questo, al di là della legittima diversità di posizioni, ogni attività legislativa finisce per confrontarsi con una domanda decisiva: quale concezione della persona umana ispira le leggi e quale tipo di società queste leggi costruiscono.

Di fronte a tale questione, la Spagna possiede una memoria particolarmente ricca. La sua identità geografica e politica si è intrecciata con una storia in cui fede e ragione, arte e diritto, tradizione e pensiero hanno saputo incontrarsi in modo fecondo. Nelle sue cattedrali e nelle sue università, nella sua letteratura immortale, nelle sue istituzioni giuridiche e nell'animo stesso del suo popolo, rimane viva un'eredità che ha dato forma un peculiare modo di vivere la libertà, di praticare la giustizia e di ordinare la vita comune.

Dalle pagine universali del Don Chisciotte, dove Cervantes proclamò che «la libertà [...] è uno dei doni più preziosi che il cielo abbia concesso agli uomini» (*Don Chisciotte della Mancia*, II, 58), fino alla profondità spirituale di Santa Teresa d'Avila, e dalla grande tradizione giuridica spagnola all'inquietudine metafisica di Unamuno, che ricordava che l'uomo «non si rassegna a morire del tutto» (*Del sentimento tragico della vita*, I), la Spagna ha saputo guardare all'essere umano come a qualcosa di più di un semplice tassello dell'ordine sociale, economico o politico: lo ha riconosciuto come creatura aperta alla verità, dotata di libertà e mossa da una sete di eternità che nessuna realtà temporale riesce a spegnere; in una parola, come qualcuno la cui dignità precede ogni utilità e al cui servizio è soggetta l'azione legislativa.

Perciò, quando oggi si parla della persona umana, la memoria conduce naturalmente a Salamanca e al pensiero che lì è maturato. La presenza simbolica in questa sala dei Re Isabella e Ferdinando rimanda a quel momento in cui la Spagna si trovò di fronte a responsabilità storiche di portata universale; pochi anni dopo, Salamanca avrebbe dovuto assumere, con singolare lucidità, la riflessione morale e giuridica che quella situazione richiedeva. In quella sede universitaria, cinquecento anni fa, quando si aprivano nuovi mondi e immense possibilità nelle relazioni tra i popoli,

alcuni maestri compresero che la ragione non poteva essere invocata per rivestire di legittimità ciò che la forza o l'interesse presentavano come conveniente. Introdussero così nel discernimento storico la domanda sul valore irriducibile di ogni essere umano e sui limiti morali del potere. Bisogna riconoscere che la società e la Chiesa stessa non sono state sempre all'altezza delle intuizioni che trovavano eco nella loro stessa tradizione cristiana.

Tuttavia, quell'interrogativo aprì un orizzonte intellettuale e morale che andò ben oltre il proprio contesto storico. L'intuizione del *totus orbis*, di una comunità umana più ampia di qualsiasi potere particolare, consentiva di affermare l'esistenza di legami giuridici e morali tra i popoli. Dalla Spagna, la riflessione della Scuola di Salamanca — e in particolare di frate Francisco de Vitoria, insieme ad altri domenicani e gesuiti — ha contribuito a formare una coscienza giuridica e morale capace di ricordare che l'autorità comporta sempre una responsabilità e che ogni essere umano dev'essere riconosciuto come soggetto di diritti e doveri. Quell'anelito continua a risuonare anche oggi: che la dignità, la giustizia e il bene comune siano la misura delle relazioni sociali, a livello sia nazionale sia internazionale.

Questa è una delle grandi eredità della Spagna: aver unito l'azione storica alla lucidità della ragione morale. Tale contributo, nato sulle rive del Tormes, ha superato le aule e le biblioteche ed è entrato a far parte di una coscienza più ampia, condivisa dalla comunità internazionale, che continua a chiedersi come costruire la pace sul riconoscimento della persona e non sull'imposizione della forza. Quell'eredità vive anche in queste Cortes, ogni volta che il legislatore si chiede come far sì che il possibile sia giusto, che il legale sia veramente umano e che la volontà della maggioranza custodisca quei beni che appartengono a tutti e rispetti ciò che nessuna maggioranza può legittimamente violare.

La domanda di Salamanca continua ad accompagnare l'impegno di chi opera nella vita pubblica. Oggi, i nuovi mondi che si aprono davanti a noi non sono più tracciati sulle mappe: si dispiegano nella tecnica, nell'economia, nella biomedicina e nell'universo digitale, dove il potere umano raggiunge ambiti sempre più delicati della vita personale e sociale.

Il progresso offre possibilità meravigliose, e oggi lo vediamo in modo particolare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Come ho ricordato nella mia recente Enciclica, la tecnologia in sé stessa non è neutra, perché assume il volto di chi la concepisce, la finanzia, la regola e la utilizza (cfr *Magnifica humanitas*, 9); per questo, di fronte alle trasformazioni del nostro tempo, il nostro discernimento deve concentrarsi sul posto che occupa la persona umana nelle nostre decisioni e su come si prospettano oggi, in modo nuovo, la dignità del lavoro, la solidarietà, la politica sociale e il bene comune.

Questo discernimento parte da un'affermazione fondamentale: ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Tale dignità precede ogni concessione dello Stato e non può essere subordinata a consensi sociali mutevoli o alle fluttuazioni delle maggioranze del momento (cfr BENEDETTO XVI, *Discorso al Parlamento Federale tedesco*, 22 settembre 2011). Essa appartiene a ogni essere umano per il fatto stesso di esistere, e per questo deve orientare ogni ordinamento giuridico positivo. La fede cristiana la proclama a partire dalla Rivelazione; la ragione umana può riconoscerla come esigenza inscritta nella verità dell'uomo (cfr *ibid.*). Quando questa convinzione rimane viva, il diritto diventa tutela di tutti e garanzia contro l'imposizione di interessi e programmi particolari.

Su questa base, mi è dato oggi di rivolgere una parola serena e decisa a coloro che hanno la grave responsabilità di ordinare giuridicamente la convivenza sociale. Tale convivenza può vedersi minacciata dalla cultura dello scarto, come ha più volte osservato Papa Francesco (cfr *Discorso all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia per la Vita*, 27 settembre 2021). In questo senso, se la vita cessa di essere riconosciuta come un valore fondamentale, quale futuro possono avere le nostre società? Può dirsi pienamente giusta una comunità che lascia nell'ombra il bambino non ancora nato, l'anziano, il malato, chi soffre in silenzio o chi dipende interamente dalla cura degli altri? La difesa della vita umana non è una questione di interesse particolare né confessionale: è una meta di civiltà. Ogni vita umana dev'essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto, in ogni circostanza della sua esistenza. Quando questa certezza si offusca, i più vulnerabili

sono le prime vittime e la legge perde il suo significato più profondo: servire e proteggere ogni persona. Per questo, la grandezza morale di una nazione si manifesta, soprattutto, nella sua capacità di accompagnare, proteggere e amare quelle vite segnate da maggiore fragilità.

Il bene comune è, in un certo senso, “la forma sociale della dignità umana” (cfr *Magnifica humanitas*, 59). Esso non consiste nella mera somma di interessi particolari, ma nell’«insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente» (*Gaudium et spes*, 26). Quando il bene comune cessa di essere un orizzonte condiviso, l’azione pubblica rischia di frammentarsi in interessi parziali, incapaci di custodire ciò che appartiene a tutti.

In questo contesto riveste particolare importanza la famiglia, prima realtà umana e fondamento naturale della comunità. Nell’ambito familiare si intrecciano le generazioni e si trasmette una memoria viva che dà continuità interiore alla società. Laddove la famiglia è sostenuta, si rafforza anche la stabilità spirituale e sociale delle nazioni. La famiglia sarà sempre la prima scuola di umanità dove si impara, prima che in qualsiasi altro luogo, la grammatica elementare della convivenza: accogliere la vita, prendersi cura dell’altro, perdonare, servire e appartenere.

Anche le istituzioni educative rivestono un ruolo decisivo in questo compito. In esse, le nuove generazioni possono imparare a cercare e ad amare la verità, a interrogarsi sul senso della vita e sulla dignità di ogni persona. Perciò molti genitori, desiderosi che i propri figli imparino a relazionarsi con gli altri, a pensare con spirito critico e ad acquisire valori solidi, ripongono in esse grandi speranze, come preziose alleate nella loro educazione. Questa collaborazione deve sempre rispettare il «diritto primario e inalienabile» dei genitori di «scegliere il tipo di istruzione e di formazione da impartire ai figli, coerentemente alle proprie convinzioni morali, culturali e religiose» (cfr *Magnifica humanitas*, 143; *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, art. 18.4).

L’affermazione della dignità umana non può rimanere astratta, quando tante persone sono costrette a lasciare tutto per cercare pace, sicurezza e futuro. Anche il tragico dramma migratorio interpella oggi la coscienza delle nazioni e il fondamento etico dell’ordine internazionale. Numerosi uomini, donne e bambini si trovano forzati, a causa di circostanze spesso drammatiche, a partire dalle loro comunità e lasciarsi alle spalle persone care, storie e legami. Questa realtà va oltre qualsiasi lettura puramente demografica o economica: costituisce una questione eminentemente morale e giuridica. Laddove una persona è discriminata per la sua origine nazionale, etnica, religiosa o linguistica, o per la sua condizione economica o sociale, viene gravemente violato il principio universale dell’uguale dignità di tutti gli esseri umani.

La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione di flussi. Da qui nasce una duplice esigenza di giustizia sociale: offrire vie sicure e legali, un’accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione; e promuovere, al tempo stesso, il diritto di rimanere nella propria terra, operando affinché nessuno debba abbandonare la propria casa per mancanza di pace, di sicurezza o di condizioni di vita dignitose, per le disuguaglianze economiche e gli effetti della crisi climatica (cfr *Magnifica humanitas*, 81).

Negli ultimi anni, le rotte sempre più pericolose hanno evidenziato il costo altissimo di questa realtà, spesso nascosta o ignorata. Molte persone continuano a essere vittime di trafficanti e contrabbandieri che approfittano della loro disperazione. È necessario rafforzare la prevenzione, il salvataggio e l’assistenza alle vittime, specialmente nel quadro di una cooperazione regionale e multilaterale.

Nessuna nazione può affrontare da sola una sfida di questa portata. Per questo è indispensabile una risposta coordinata, solidale ed efficace, in grado di garantire protezione, accoglienza e reali opportunità di integrazione a chi emigra. Quando la risposta istituzionale si fa vicina, equa e coordinata, le frontiere cessano di essere luoghi di abbandono e possono diventare spazi di tutela responsabile della dignità umana.

Onorevoli,

Il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale, che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto, la pace si presenta come un'aspirazione politica e, ancor più, come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetti chi la pensa diversamente, istituzioni al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione e una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco pur in mezzo alle divergenze.

A livello internazionale, la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli Stati di risolvere le loro controversie attraverso le vie pacifiche offerte dal diritto internazionale. Ogni guerra costituisce, in ultima analisi, una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella coscienza comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura.

Per questo motivo, è preoccupante che, in diverse parti del mondo, e anche in Europa, si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza, invece, nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica, affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana (cfr *Discorso all'Università "La Sapienza"*, 14 maggio 2026).

La comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza.

Come ricorda il motto dell'Unione Europea, *In varietate concordia*, la vera unità non è uniforme, ma rende coesi nella diversità, facendo delle culture, delle sensibilità e delle tradizioni occasione di arricchimento reciproco.

Allo stesso modo, all'interno delle società stesse è urgente promuovere una cultura della reciprocità. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. In una convivenza matura, anche il conflitto può diventare un passaggio verso la pace, quando le differenze si lasciano mitigare dall'ascolto e si orientano al riconoscimento dei bisogni, delle aspirazioni e delle capacità di tutti.

Ma la pace non è solamente una realtà politica o istituzionale. Nasce anche nella coscienza, là dove il rancore, l'indifferenza e l'odio lasciano spazio alla riconciliazione. Perciò si instaura e si tutela anche attraverso il linguaggio. Le parole possono aprire strade o chiuderle; possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno, pertanto, un obbligo speciale di custodire la parola per «disarmare il linguaggio» (*Messaggio per la Quaresima del 2026*, 13 febbraio 2026). La fermezza non esige disprezzo; il dissenso non comporta umiliazione.

Da questo rispetto per l'altro nasce anche il dovere di custodire lo spazio in cui maturano le sue convinzioni, la sua coscienza e il suo rapporto con Dio. L'attenzione a tale ambito interiore permette di comprendere meglio una questione decisiva per ogni società veramente democratica: la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, diritto fondamentale che tutela la sfera più intima delle persone. La libertà su cui si fonda lo Stato contemporaneo, se è autentica, riconosce la dimensione religiosa dell'essere umano, la rispetta e la tutela giuridicamente; ed evita che qualcuno debba rinunciare a contribuire alla società in cui vive a causa della propria fede.

Senza confondere il piano giuridico e quello morale, è bene ricordare anche che la libertà richiede una piena comprensione di sé stessa. Essere liberi non significa solo vivere senza costrizioni o disporre di molte possibilità di scelta; significa poter riconoscere il bene e aderirvi in modo responsabile. Per questo, ogni società effettivamente libera richiede anche una giusta delimitazione del potere pubblico, affinché la libertà delle persone, delle comunità e delle associazioni non sia

indebitamente limitata (cfr *Dignitatis humanae*, 1). In questa prospettiva, la legittima autonomia dell'ordine temporale non va mai interpretata come ostilità verso il fenomeno religioso. La fede non pretende di imporsi con privilegi o coercizioni; tuttavia, non può nemmeno essere relegata al silenzio come se fosse irrilevante per la vita pubblica.

In questo contesto, il sigillo sacramentale della Confessione riveste un'importanza speciale per la Chiesa cattolica. Esso si inserisce nel contesto più ampio della libertà religiosa, che garantisce alle comunità credenti uno spazio proprio di vita, di organizzazione e di disciplina interna (cfr CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA, *Atto finale di Helsinki*, 1° agosto 1975, Principio VII). Tutelarla giuridicamente, come avviene in modo analogo in alcune professioni, significa preservare uno spazio sacro di libertà interiore, dove il credente può aprire la propria anima a Dio senza timore di pressioni esterne, come riconoscono anche le norme internazionali (cfr CORTE PENALE INTERNAZIONALE, *Regole di procedura e prova*, Regola 73.3).

Signore e signori:

Permettetemi di soffermarmi un momento su alcune immagini che adornano questa Camera. In quest'Aula delle Sessioni, la luce naturale entra attraverso il lucernario che corona la sala. La luce che viene dall'alto può ricordare che anche la politica ha bisogno di riconoscere una misura che la precede e la supera.

Anche i dipinti che, nella parte superiore della parete principale, evocano l'accoglienza del Vangelo e del Decalogo, ricordano qualcosa di essenziale. Senza confondere l'ordine politico con quello religioso, questi segni invitano a riconoscere che la libertà moderna è stata preparata anche da una lunga educazione della coscienza, profondamente segnata dalla tradizione cristiana. In questa scuola interiore, i popoli hanno imparato che il diritto deve servire al bene, che la giustizia pone limiti alla forza, che il potere ha bisogno di legittimità, che i poveri appartengono pienamente alla comunità, che lo straniero deve essere accolto secondo la sua dignità e che mai la vita umana può mai essere trattata come una merce.

Una legge non raggiunge la sua vera grandezza per il semplice fatto di essere stata formalmente approvata; la raggiunge quando, oltre ad essere valida nella forma, può presentarsi davanti alla dignità della persona e superare tale esame senza vergognarsi.

Vi invito quindi ad alzare lo sguardo: non per allontanarsi dalla realtà, ma per ricordare che ogni decisione delle autorità pubbliche riguarda persone in carne e ossa, specialmente coloro che hanno meno forza per farsi sentire. Poiché l'altezza di vedute consiste proprio nel guardare con maggiore profondità a ciò che è in gioco in ogni decisione pubblica. Per questo, accanto alle risposte tecniche e alle riforme legislative, è necessario anche un rinnovamento morale.

La Spagna può offrire molto in questo percorso. Ha una lingua che unisce i continenti; una tradizione culturale, giuridica e spirituale che ha saputo mettere in dialogo fede e ragione, diritto e coscienza, unità e pluralità. Questa esperienza storica ricorda anche il valore della concordia e dello sforzo paziente per costruire una convivenza pacifica e giusta.

Possa questa nobile Nazione non perdere mai la memoria delle proprie radici né il coraggio di guardare al futuro. Che la Spagna continui ad essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza. E che la sua vita pubblica sappia sempre unire la fermezza delle convinzioni alla nobiltà del dialogo e alla grandezza del servizio.

Dio conceda pace a tutte le Nazioni della terra, concordia alle famiglie e serenità alle coscienze. E sul Regno di Spagna, segnato dall'impronta apostolica di San Giacomo e dalla presenza materna della Vergine del Pilar, scendano giorni di prosperità, giustizia e pace duratura. Grazie!

[00928-IT.01] [Testo originale: Spagnolo]

Traduzione in lingua tedesca

Herr Ministerpräsident,
Frau Präsidentin des Abgeordnetenhauses,

Herr Präsident des Senats,
 Herr Präsident des Verfassungsgerichts,
 Frau Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und der rechtsprechenden Gewalt,
 Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats,
 Meine Damen und Herren!

Ich danke der Frau Präsidentin für ihre freundlichen Worte und für die Einladung, die der Apostolische Stuhl anlässlich meiner Reise in dieses Land erhalten hat, wie auch für die Ehre, mich in diesem historischen Gebäude des Abgeordnetenhauses, dem bedeutenden Zentrum des institutionellen, juristischen und demokratischen Lebens des Königreichs Spanien, willkommen zu heißen. Ich komme zu Ihnen allen als Bischof von Rom und Hirte der katholischen Kirche, in dem Bewusstsein, dass die dem Nachfolger des Apostels Petrus als Prinzip und Fundament für die Einheit von Bischöfen und Gläubigen (vgl. *Lumen gentium*, 23) anvertraute Sendung den Heiligen Stuhl in besonderer Weise in einen Dialog mit den Völkern und den Staaten stellt.

Mit meiner Anwesenheit unter Ihnen möchte ich im Rahmen der gegenseitigen Zusammenarbeit ein Zeichen der Verbundenheit mit Spanien setzen und ein Wort im Dienste der menschlichen Person sprechen. Die Kirche »ist gemeinsam mit der Menschheit unterwegs«, sie teilt ihre Hoffnungen und ihre Wunden, hört auf die Fragen jeder Epoche und lässt sich herausfordern »von allem, was das Leben der Männer und Frauen von heute betrifft«. Wenn sie sich daher an das öffentliche Leben wendet, respektiert sie die Eigenständigkeit der Institutionen und die rechtmäßige Verantwortung derer, die den Auftrag zur Gesetzgebung erhalten haben. Sie erkennt »die Autonomie der irdischen Wirklichkeiten« und »die Unterscheidung zwischen kirchlicher Gemeinschaft und politischer Gemeinschaft« an; und gerade aus diesem Bewusstsein heraus trägt sie Überlegungen bei, die aus dem Wunsch hervorgehen, dem Gemeinwohl zu dienen und an das zu erinnern, was das Zusammenleben wahrhaft menschlich macht (vgl. *Magnifica humanitas*, 18-19).

In diesem Plenarsaal nimmt das gesellschaftliche Zusammenleben seine rechtliche Gestalt an. Hier finden die unterschiedlichen Standpunkte Gehör, die dann geordnet und, wenn möglich, in eine gemeinsame Entscheidung überführt werden. Deshalb steht jede gesetzgeberische Tätigkeit, jenseits der legitimen Meinungsvielfalt, letztlich vor einer entscheidenden Frage: Welches Menschenbild steht hinter den Gesetzen, und welche Art von Gesellschaft entsteht durch diese Gesetze?

Was diese Frage betrifft, verfügt Spanien über ein besonders reiches Vermächtnis. Seine geografische und politische Identität ist eng mit einer Geschichte verwoben, in der Glaube und Vernunft, Kunst und Recht, Tradition und Denken auf fruchtbare Weise miteinander verbunden sind. In seinen Kathedralen und Universitäten, in seiner unvergesslichen Literatur, in seinen Rechtsinstitutionen und im Geist seines Volkes lebt ein Erbe weiter, das eine besondere Art und Weise geprägt hat, Freiheit zu leben, Gerechtigkeit zu üben und das Zusammenleben zu gestalten.

Von den weltberühmten Seiten des *Don Quijote*, in denen Cervantes verkündete, dass »die Freiheit [...] eines der kostbarsten Geschenke ist, die der Himmel den Menschen gegeben hat« (*Don Quijote de la Mancha*, II, 58), bis hin zur geistlichen Tiefe der heiligen Teresia von Ávila und von der großen spanischen Rechtstradition bis zur metaphysischen Unruhe Unamunos, der daran erinnerte, dass der Mensch »sich nicht damit abfindet, ganz zu sterben« (*Vom tragischen Gefühl des Lebens*, I), wusste Spanien stets, den Menschen als mehr als nur ein Rädchen im sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Getriebe zu betrachten. Es hat ihn als ein Wesen anerkannt, das offen für die Wahrheit ist, mit Freiheit ausgestattet und von einem Durst nach Ewigkeit angetrieben, den nichts Zeitliches stillen kann; mit einem Wort: als jemanden, dessen Würde über jedem Nutzen steht und in dessen Dienst die Gesetzgebung steht.

Wenn wir heute also von der menschlichen Person sprechen, führt uns die Erinnerung natürlich nach Salamanca und zu dem Denken, das dort gereift ist. Die symbolische Präsenz der Könige Isabella und Ferdinand in diesem Saal verweist auf jene Zeit, in der Spanien vor einer historischen Verantwortung von universalem Ausmaß stand; wenige Jahre später sollte Salamanca mit einzigartiger Klarheit die ethische und rechtliche Reflexion übernehmen, die diese Situation erforderte. An jenem Universitätsstandort erkannten vor fünfhundert Jahren, als sich neue Welten

auftaten und sich immense Möglichkeiten in den Beziehungen zwischen den Völkern eröffneten, einige Gelehrte, dass man sich nicht auf die Vernunft berufen konnte, um all das zu legitimieren, was Macht oder Eigeninteresse zweckdienlich erschien. So führten sie in die geschichtliche Unterscheidung die Frage nach dem unantastbaren Wert jedes Menschen und den ethischen Grenzen der Macht ein. Man muss anerkennen, dass die Gesellschaft und auch die Kirche nicht immer den Einsichten gerecht wurden, die in ihrer eigenen christlichen Tradition Wiederhall fanden.

Allerdings eröffnete diese Frage einen intellektuellen und ethischen Horizont, der über den eigenen geschichtlichen Kontext hinausreichte. Die Vorstellung vom *totus orbis*, einer menschlichen Gemeinschaft, die größer ist als irgendeine einzelne Macht, ermöglichte es, die Existenz juridischer und ethischer Verbindungen zwischen den Völkern festzustellen. Von Spanien aus trugen die Überlegungen der Schule von Salamanca – und insbesondere die von Pater Francisco de Vitoria und anderen Dominikanern und Jesuiten – dazu bei, ein rechtliches und moralisches Bewusstsein zu formen, das daran erinnert, dass Autorität stets mit Verantwortung einhergeht und dass jeder Mensch als Träger von Rechten und Pflichten anerkannt werden muss. Dieses Anliegen ist auch heute noch aktuell: dass Würde, Gerechtigkeit und das Gemeinwohl der Maßstab der sozialen Beziehungen sein sollen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Dies ist eines der großen Vermächnisse Spaniens: das historische Handeln mit der Klarheit der ethischen Vernunft verbunden zu haben. Dieser Beitrag, der an den Ufern des Tormes entstand, ging über die Hörsäle und Bibliotheken hinaus und wurde Teil eines umfassenderen Bewusstseins, das von der internationalen Gemeinschaft geteilt wird, die sich weiterhin fragt, wie man Frieden durch die Anerkennung des Menschen und nicht durch den Einsatz von Gewalt erreichen kann. Dieses Erbe lebt auch in diesem Parlament weiter, jedes Mal, wenn sich der Gesetzgeber fragt, wie sichergestellt werden kann, dass das Mögliche auch gerecht ist, dass das Gesetz wahrhaft menschlich ist und dass der Wille der Mehrheit jene Güter schützt, die allen gehören, und das respektiert, was zu verletzen keine Mehrheit das Recht hat.

Die Frage von Salamanca begleitet nach wie vor die Arbeit derjenigen, die im öffentlichen Leben wirken. Heute lassen sich die neuen Welten, die sich vor uns auftun, nicht mehr auf Landkarten abbilden: Sie entstehen im Bereich der Technik, der Wirtschaft, der Biomedizin und im digitalen Universum, wo die Macht des Menschen immer sensiblere Bereiche des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens betrifft.

Der Fortschritt bietet bewundernswerte Möglichkeiten, und dies zeigt sich heute in einzigartiger Weise in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und neuen Technologien. Wie ich in meiner jüngsten Enzyklika in Erinnerung gerufen habe, ist Technologie an sich nicht neutral, denn sie nimmt die Züge dessen an, der sie konzipiert, finanziert, reguliert und nutzt (vgl. *Magnifica humanitas*, 9); deshalb muss sich unsere Unterscheidung angesichts der Veränderungen unserer Zeit auf die Frage konzentrieren, welchen Platz der Mensch in unseren Entscheidungen einnimmt und wie sich heute die Würde der Arbeit, die Solidarität, die Sozialpolitik und das Gemeinwohl auf neue Weise darstellen.

Diese Unterscheidung beginnt mit einer grundlegenden Feststellung: Jede wahrhaft gerechte Gesellschaft gründet auf der Anerkennung der unantastbaren Würde des Menschen. Diese Würde geht jeder Zuerkennung vonseiten des Staates voraus und darf nicht wechselhaften gesellschaftlichen Konsensen oder den momentanen Mehrheitsmeinungen untergeordnet werden (vgl. BENEDIKT XVI., *Ansprache vor dem Deutschen Bundestag*, 22. September 2011). Sie steht jedem Menschen allein aufgrund seiner Existenz zu und muss daher jede positive Rechtsordnung prägen. Der christliche Glaube proklamiert sie ausgehend von der Offenbarung; die menschliche Vernunft kann sie als ein in der Wahrheit des Menschen verankertes Erfordernis erkennen (vgl. *ebd.*). Wenn diese Überzeugung lebendig bleibt, wird das Recht zum Schutz für alle und zur Garantie gegen die Durchsetzung partikularer Interessen und Agenden.

Auf dieser Grundlage möchte ich heute ein ruhiges und entschlossenes Wort an diejenigen richten, die die große Verantwortung tragen, das gesellschaftliche Zusammenleben rechtlich zu regeln. Dieses Zusammenleben kann durch die Wegwerfkultur bedroht sein, worauf Papst Franziskus

oft hingewiesen hat (vgl. *Ansprache vor der Vollversammlung der Päpstlichen Akademie für das Leben*, 27. September 2021). In diesem Sinne stellt sich die Frage: Welche Zukunft haben unsere Gesellschaften, wenn das Leben nicht mehr als grundlegender Wert anerkannt wird? Kann eine Gemeinschaft, die das ungeborene Kind, den alten Menschen, den Kranken, den still Leidenden oder denjenigen, der ganz auf die Fürsorge anderer angewiesen ist, ausblendet, als wirklich gerecht bezeichnet werden? Die Verteidigung des menschlichen Lebens ist weder eine Partei- noch eine konfessionelle Angelegenheit: Sie ist ein zivilisatorisches Ziel. Jedes menschliche Leben muss von seiner Empfängnis bis zu seinem natürlichen Lebensende, unter allen Umständen seiner Existenz, anerkannt und geschützt werden. Wenn diese Gewissheit verblasst, sind die Schwächsten die ersten Opfer, und das Gesetz verliert seine tiefste Bedeutung: jedem Menschen zu dienen und ihn zu schützen. Deshalb zeigt sich die moralische Größe einer Nation vor allem in ihrer Fähigkeit, jene Leben zu begleiten, zu schützen und zu lieben, die sich in einer besonders fragilen Lage befinden.

Das Gemeinwohl ist in gewisser Weise »die gesellschaftliche Form der Menschenwürde« (vgl. *Magnifica humanitas*, 59). Es besteht nicht in der bloßen Summe einzelner Interessen, sondern in »der Gesamtheit jener Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, die sowohl den Gruppen als auch deren einzelnen Gliedern ein volleres und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung ermöglichen« (*Gaudium et spes*, 26). Wenn das Gemeinwohl nicht mehr als gemeinsamer Horizont gilt, läuft das öffentliche Leben Gefahr, in Partikularinteressen zu zerfallen, die nicht in der Lage sind, das zu bewahren, was allen gehört.

In diesem Zusammenhang kommt der Familie, der ersten menschlichen Gegebenheit und natürlichen Grundlage der Gemeinschaft, besondere Bedeutung zu. Im Zuhause verbinden sich die Generationen miteinander, und es wird eine lebendige Erinnerung weitergegeben, die der Gesellschaft innere Kontinuität verleiht. Wo die Familie unterstützt wird, wird auch die geistige und soziale Stabilität der Nationen gestärkt. Die Familie wird immer die erste Schule der Menschlichkeit sein, in der man früher als an jedem anderen Ort die grundlegenden Regeln des Zusammenlebens erlernt: das Leben anzunehmen, für den anderen da zu sein, zu vergeben, zu dienen und dazuzugehören.

Auch die Bildungseinrichtungen spielen bei dieser Aufgabe eine entscheidende Rolle. In ihnen können die neuen Generationen lernen, die Wahrheit zu suchen und zu lieben, sich Fragen über den Sinn des Lebens und die Würde jedes Menschen zu stellen. Deshalb setzen viele Eltern, die sich wünschen, dass ihre Kinder lernen, Beziehungen zu knüpfen, kritisch zu denken und feste Werte zu entwickeln, große Hoffnungen in sie als wertvolle Partner bei der Erziehung ihrer Kinder. Diese Zusammenarbeit muss stets das »vorrangige und unveräußerliche Recht« der Eltern respektieren, »die Art der Erziehung und Bildung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen moralischen, kulturellen und religiösen Überzeugungen zu wählen« (vgl. *Magnifica humanitas*, 143; vgl. *Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte*, Art. 18.4).

Die Rede von der Menschenwürde darf nicht abstrakt bleiben, wenn so viele Menschen dazu gezwungen sind, für Frieden, Sicherheit und eine Zukunft alles zu verlassen. Auch die tragische Migrationskrise stellt heute eine Anfrage an das Gewissen der Nationen und an die ethischen Grundlagen der internationalen Ordnung dar. Zahlreiche Männer, Frauen und Kinder sind aufgrund oft dramatischer Umstände gezwungen, aus ihren Gemeinschaften wegzugehen und ihre Angehörigen, ihre Geschichte und ihre Bindungen dort zurückzulassen. Dies ist weit mehr als eine rein demografische oder wirtschaftliche Frage: Es handelt sich um eine vorrangig moralische und rechtliche Angelegenheit. Wo immer ein Mensch aufgrund seiner nationalen, ethnischen, religiösen oder sprachlichen Herkunft oder aufgrund seiner wirtschaftlichen oder sozialen Lage diskriminiert wird, wird der universale Grundsatz der gleichen Würde aller Menschen ernsthaft verletzt.

Die Situation von Migranten und Flüchtlingen erfordert eine Antwort, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, die die Ursachen ihres Weggangs angeht und über die bloße Steuerung der Migrationsströme hinausgeht. Daraus ergibt sich ein doppeltes Erfordernis sozialer Gerechtigkeit: sichere und legale Wege, würdige Aufnahmebedingungen und echte Integrationsmöglichkeiten zu bieten; und gleichzeitig das Recht zum Verbleib im eigenen Land zu fördern, indem darauf

hingearbeitet wird, dass niemand sein Zuhause aufgrund von Mangel an Frieden und Sicherheit oder aufgrund von menschenunwürdigen Lebensbedingungen verlassen muss, zu denen auch wirtschaftliche Ungerechtigkeiten und die Auswirkungen der Klimakrise gehören (vgl. *Magnifica humanitas*, 81).

In den letzten Jahren haben die immer gefährlicher werdenden Routen die enormen Kosten dieses oft verschwiegenen oder ignorierten Problems deutlich gemacht. Viele Menschen fallen nach wie vor Menschenhändlern und Schmugglern zum Opfer, die ihre Verzweiflung ausnutzen. Es ist notwendig, Maßnahmen zur Prävention, Rettung und Opferhilfe zu verstärken, insbesondere im Rahmen einer regionalen und multilateralen Zusammenarbeit.

Keine Nation kann eine Herausforderung dieser Größenordnung alleine bewältigen. Daher ist eine koordinierte, solidarische und wirksame Reaktion unerlässlich, die den Migranten Schutz, Aufnahme und echte Integrationschancen gewährleisten kann. Wenn die institutionelle Reaktion nahbar, gerecht und koordiniert ausfällt, sind Grenzen nicht länger Orte der Verlassenheit, sondern können zu Räumen werden, in denen die Menschenwürde verantwortungsvoll geschützt wird.

Sehr geehrte Damen und Herren:

Die Welt befindet sich in einer tiefen geistigen und kulturellen Krise, die sich in vielfältigen Formen von Gewalt, Polarisierung und gegenseitigem Misstrauen äußert. In diesem Zusammenhang stellt sich der Frieden als politisches Ziel und darüber hinaus als echte moralische Notwendigkeit dar. Er verlangt nach einem öffentlichen Diskurs, der Andersdenkende respektiert, nach Institutionen, die der Begegnung dienen, nach einem historischen Gedächtnis, das nach Wahrheit und Versöhnung strebt, sowie nach einem gesellschaftlichen Leben, das in der Lage ist, soziale Freundschaft und gegenseitigen Respekt auch bei Meinungsverschiedenheiten aufrechtzuerhalten.

Auf internationaler Ebene erfordert Frieden diplomatischen Mut, ethische Verantwortung und eine Zukunftsvision, die auf der Achtung der Identität jedes Volkes und der Verpflichtung der Staaten beruht, ihre Streitigkeiten auf den friedlichen Wegen zu lösen, die das Völkerrecht bietet. Jeder Krieg ist letztlich eine schmerzhaftes Niederlage für die Fähigkeit zu verhandeln und auch für jenes allgemeine Bewusstsein der Menschheit, das zwischen den Nationen Bande der Gerechtigkeit erkennt. Waffen mögen vorübergehend für Ruhe sorgen, doch sie werden niemals einen echten und dauerhaften Frieden schaffen können.

Darum ist es besorgniserregend, dass sich an verschiedenen Orten der Welt, auch in Europa, die Aufrüstung erneut als fast unvermeidliche Antwort auf die Instabilität der internationalen Lage darstellt. Wahre Sicherheit hingegen entspringt der Gerechtigkeit, dem geduldigen Dialog, der Achtung des Völkerrechts und einer Politik, die in der Lage ist, das Leben der Völker über die Interessen zu stellen, die vom Krieg profitieren. Auch die Entwicklung neuer Technologien und künstlicher Intelligenz im militärischen Bereich erfordert eine strenge ethische Kontrolle, damit Entscheidungen über Leben und Tod niemals auf automatisierte Systeme abgewälzt oder der moralischen Verantwortung des Menschen entzogen werden (vgl. *Ansprache an der Universität „La Sapienza“*, 14. Mai 2026).

Die internationale Gemeinschaft ist gefordert, den unschätzbaren Wert des Dialogs als geduldigen Weg zu gerechten und dauerhaften Vereinbarungen wiederzuentdecken, die auf der Einhaltung von Verträgen, der Transparenz diplomatischer Maßnahmen und dem aufrichtigen Willen beruhen, den Frieden der Anwendung von Gewalt vorzuziehen. Daraus entstehen Vertrauen und Hoffnung.

Wie das Motto der Europäischen Union *In varietate concordia* besagt, bedeutet wahre Einheit nicht Gleichförmigkeit, sondern Zusammenhalt in der Vielfalt, wobei Kulturen, Mentalitäten und Traditionen zu einer Quelle gegenseitiger Bereicherung werden.

Auch innerhalb der Gesellschaften selbst ist es dringend notwendig, eine Kultur der Gegenseitigkeit aufzubauen. Politische Vielfalt sollte nicht in eine permanente Abwertung des Gegners ausarten. In einem reifen Zusammenleben kann sogar ein Konflikt zu einem Weg zum Frieden werden, wenn sich die Differenzen durch Zuhören verringern lassen und auf die Anerkennung der Bedürfnisse, Bestrebungen und Fähigkeiten aller ausrichten.

Doch Friede ist nicht nur eine politische oder institutionelle Angelegenheit. Er entsteht auch im Gewissen, dort, wo Groll, Gleichgültigkeit und Hass der Versöhnung weichen. Deshalb wird Friede auch durch Sprache gestiftet und bewahrt. Worte können Wege eröffnen oder versperren; sie können die Wirklichkeit erhellen oder sie so verzerren, dass eine Begegnung unmöglich wird. Wer öffentliche Verantwortung trägt, hat daher eine besondere Verpflichtung, mit Worten achtsam umzugehen, um »die Sprache [zu] entwaffnen« (*Fastenbotschaft 2026*, 13. Februar 2026). Bestimmtheit erfordert keine Verachtung; Meinungsverschiedenheit muss nicht mit Demütigung einhergehen.

Aus dieser Achtung vor dem anderen erwächst auch die Pflicht, den Raum zu schützen, in dem seine Überzeugungen, sein Gewissen und seine Gottesbeziehung reifen. Die Achtung dieses inneren Bereichs ermöglicht ein besseres Verständnis einer Frage, die für jede wahrhaft demokratische Gesellschaft entscheidend ist: die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, ein Grundrecht, das den intimsten Bereich des Menschen schützt. Die Freiheit, auf der der moderne Staat aufgebaut ist, erkennt, sofern sie authentisch ist, die religiöse Dimension des Menschen an, achtet sie und schützt sie rechtlich; und sie verhindert, dass jemand aufgrund seines Glaubens darauf verzichten muss, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, in der er lebt.

Ohne die rechtliche Ebene mit der moralischen zu verwechseln, sollte man auch bedenken, dass Freiheit ein umfassendes Selbstverständnis erfordert. Frei zu sein bedeutet nicht nur, frei von Zwängen zu sein oder über viele Wahlmöglichkeiten zu verfügen; es bedeutet, das Gute erkennen und sich verantwortungsbewusst dafür entscheiden zu können. Deshalb erfordert jede wirklich freie Gesellschaft auch eine gerechte Begrenzung der öffentlichen Gewalt, damit die Freiheit der Menschen, der Gemeinschaften und der Vereinigungen nicht unangemessen eingeschränkt wird (vgl. *Dignitatis humanae*, 1). In dieser Perspektive darf die legitime Autonomie der zeitlichen Ordnung niemals als Feindseligkeit gegenüber dem Religiösen ausgelegt werden. Der Glaube beansprucht nicht, sich durch Privilegien oder Zwang durchzusetzen; er darf jedoch auch nicht zum Schweigen gebracht werden, so als sei er für das öffentliche Leben irrelevant.

In diesem Zusammenhang kommt dem Beichtgeheimnis für die katholische Kirche eine besondere Bedeutung zu. Es fügt sich in den größeren Zusammenhang der Religionsfreiheit ein, die den Glaubensgemeinschaften einen eigenen Raum für Leben, Organisation und innere Ordnung garantiert (vgl. KONFERENZ ÜBER SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA, *Schlussakte von Helsinki*, 1. August 1975, Grundsatz VII). Es rechtlich zu schützen, wie dies in einigen Berufen analog geschieht, bedeutet, einen heiligen Raum innerer Freiheit zu bewahren, in dem der Gläubige seine Seele vor Gott öffnen kann, ohne Druck von außen fürchten zu müssen, wie es auch in internationalen Normen anerkannt wird (vgl. INTERNATIONALER STRAFGERICHTSHOF, *Verfahrens- und Beweisregeln*, Regel 73.3).

Meine Damen und Herren,

lassen Sie mich einen Moment bei einigen Bildern verweilen, die diese Kammer schmücken. In diesem Sitzungssaal fällt das Tageslicht durch das Oberlicht ein, das den Saal krönt. Dieses Licht, das von oben kommt, mag daran erinnern, dass auch die Politik der Anerkennung eines Maßstabs bedarf, der ihr vorausgeht und sie übersteigt.

Auch die Gemälde im oberen Teil der Hauptwand, die an die Annahme des Evangeliums und der Zehn Gebote erinnern, verweisen auf etwas Wesentliches. Ohne die politische mit der religiösen Ordnung zu verwechseln, laden diese Zeichen dazu ein, anzuerkennen, dass die moderne Freiheit auch durch eine lange Bewusstseinsbildung vorbereitet wurde, die zutiefst von der christlichen Tradition geprägt ist. In dieser inneren Schule lernten die Völker, dass das Recht dem Guten dienen muss, dass Gerechtigkeit der Gewalt Grenzen setzt, dass Macht der Legitimität bedarf, dass die Armen voll und ganz zur Gemeinschaft gehören, dass der Fremde unter Wahrung seiner Würde aufgenommen werden muss und dass das menschliche Leben niemals als Ware behandelt werden darf.

Ein Gesetz erreicht seine wahre Bedeutung nicht allein dadurch, dass es formell verabschiedet wurde; es erreicht sie erst dann, wenn es nicht nur formal gültig ist, sondern auch vor der Würde des Menschen bestehen kann und aus dieser Prüfung ohne Beschämung wieder herauskommt.

Ich lade Sie daher ein, den Blick zu heben: nicht, um der Realität zu entfliehen, sondern um sich daran zu erinnern, dass jede Entscheidung der öffentlichen Autoritäten Menschen aus Fleisch und Blut betrifft, insbesondere jene, die weniger Kraft haben, sich Gehör zu verschaffen. Denn Weitblick bedeutet gerade, genauer hinzuschauen, worum es bei jeder öffentlichen Entscheidung geht. Deshalb braucht es neben fachlichen Lösungen und Gesetzesreformen auch eine moralische Erneuerung.

Spanien hat in dieser Hinsicht viel zu bieten. Es verfügt über eine Sprache, die Kontinente verbindet, sowie über eine kulturelle, rechtliche und spirituelle Tradition, die es verstanden hat, Glauben und Vernunft, Recht und Gewissen, Einheit und Vielfalt in einen Dialog zu bringen. Diese historische Erfahrung erinnert auch an den Wert der Eintracht und des geduldigen Strebens nach einem friedlichen und gerechten Zusammenleben.

Möge diese edle Nation niemals die Erinnerung an ihre Wurzeln verlieren, noch den Mut, in die Zukunft zu blicken. Möge Spanien weiterhin ein Ort der Begegnung, der Kultur, der Solidarität und der Hoffnung sein. Und möge es im öffentlichen Leben stets gelingen, die Festigkeit der Überzeugungen mit der Noblesse des Dialogs und der Größe des Dienstes zu verbinden.

Gott schenke allen Völkern der Erde Frieden, den Familien Eintracht und den Gewissen Ruhe. Und möge dem Königreich Spanien, das vom apostolischen Wirken des Heiligen Jakobus und von der mütterlichen Nähe der *Virgen del Pilar* geprägt ist, eine Zeit des Wohlstands, der Gerechtigkeit und des dauerhaften Friedens beschieden sein. Vielen Dank.

[00928-DE.01] [Originalsprache: Spanisch]

Documento di lavoro: confronta con testo pronunciato.

[B0486-XX.01]